

# LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Ponente: María Guadalupe González Jordan<sup>1</sup>

## Resumen

En este artículo se realizará un análisis respecto de las candidaturas independientes, las cuales han sido una nueva opción que abona a la democratización del país, por ofrecer una nueva perspectiva política a la ciudadanía. Sin embargo, existen varias disposiciones legales que obstaculizan la correcta funcionalidad de esta figura, sobre todo cuando se habla del derecho a la igualdad y la equidad en las contiendas electorales frente a las instituciones partidarias. Es por ello, que es necesario establecer cuáles son los factores que desfavorecen el posicionamiento de las candidaturas independientes en México.

## Abstract

In this article an analysis will be made regarding the Independent Candidatures, which have been a new option that pays for the democratization of the country, to offer a new political perspective to the citizens. However, there are several legal provisions that hinder the correct functionality of this figure, especially when talking about the right to equality and equity in electoral contests before party institutions. That is why it is necessary to establish what are the factors that undermine the position of Independent Candidatures in Mexico.

**Palabras Clave:** candidaturas independientes, partidos políticos, democracia, elecciones, derechos.

**Keywords:** independent candidates, political parties, democracy, elections, rights.

---

<sup>1</sup> Doctora en Derecho, Instituto Electoral del Estado de México. mgjordan@ieem.org.mx

**Sumario:** I. Introducción. II. Concepto. III. Antecedentes de las candidaturas independientes en el sistema democrático mexicano. IV. El marco jurídico de las candidaturas independientes en el ámbito federal. V. Aspectos relevantes de las candidaturas impiedentes en el Estado de México. VI. Los factores de competitividad en las candidaturas independientes. VII. Conclusiones.

## **I. Introducción**

Durante mucho tiempo, los partidos políticos tuvieron el monopolio de acceso al poder gubernamental, sin embargo, los constantes cambios sociales, económicos y políticos influyeron para que se rediseñará el sistema electoral mexicano con la finalidad de que los ciudadanos tengan la posibilidad real de participar activamente en la toma de decisiones públicas tanto del país, como en las distintas entidades federativas, los municipios y actualmente en las alcaldías de la Ciudad de México.

En esta investigación se abordan las candidaturas independientes en México mediante un bosquejo general de los antecedentes por los que ha transitado esta figura, la cual se incorporó al sistema normativo a partir de las reformas constitucionales tanto del año 2012 como del 2014.

En este contexto, es importante evaluar la efectividad de las candidaturas independientes a través de diversos factores que influyen de manera determinante para que bajo esta modalidad los candidatos independientes obtengan el triunfo en los comicios.

Es por ello que, se parte de la idea de que los ciudadanos que han participado como candidatos independientes en distintas entidades y para diversos cargos de elección popular, se enfrentaran a limitantes legales y obstáculos como: el exceso de requisitos para obtener el registro como candidatos independientes; la falta de recursos económicos para la etapa en la obtención del apoyo ciudadano; el insuficiente financiamiento público que reciben los candidatos independientes en la etapa de campañas en comparación con el que obtienen los partidos políticos; el limitado acceso al financiamiento privado y el nulo acceso a los tiempos de radio y televisión durante la etapa de recolección del apoyo ciudadano.

Asimismo, se examina el comportamiento de los candidatos independientes que participaron en el Proceso Electoral 2016-2017 para elegir el cargo de Gobernador del Estado de México, en virtud de que su participación tuvo un impacto sustancial que sin duda habrá de reconfigurar el marco normativo de la entidad, toda vez que es un asunto que recién empieza a detonarse en nuestro modelo democrático.

## **II. Concepto**

En México, a partir de las reformas políticas-electorales de 2012 y 2014, se introdujo la figura de las “candidaturas independientes” al sistema democrático nacional y local, por lo que ahora se constituye como una real posibilidad para que los ciudadanos participen activamente en la vida política del país, es decir, estas aparecen como una vía diferente a los partidos políticos que hasta entonces habían mantenido el monopolio en la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

En esta tesitura, es relevante conocer el significado del término candidato independiente, el cual puede definirse como “la nominación para ocupar un cargo público electivo, cuyo rasgo peculiar y sobresaliente consiste en que tal oferta política es realizada sin el concurso, ni principal, ni complementario de un partido político.” (Ferreyra 2002)

De esta acepción, se puede señalar que un candidato es considerado como independiente porque no pertenece a un partido político, o bien, se muestra como otra opción que puede resultar más atractiva para la ciudadanía.

Por otro lado, el inciso c), del artículo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como la fracción II, del artículo 7, del Código Electoral del Estado de México (CEEM), definen al candidato independiente como: “el ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido todos los requisitos que para tal efecto establece la ley”.

En este sentido, se advierte que los candidatos independientes tendrán que satisfacer los requisitos que la ley les señala a efecto de obtener dicha calidad. En virtud de las concepciones doctrinal y jurídica se colige que la figura de las candidaturas independientes para ser consideradas como tales, es necesario que no cuente con el apoyo de ningún partido político y que satisfagan los requisitos legales.

### **III. Antecedentes de las candidaturas independientes en el sistema democrático mexicano**

Actualmente, los ciudadanos mexicanos pueden ejercer su derecho a ser votado para un cargo de elección popular a través de las “candidaturas independientes”. Al respecto, es importante señalar que los antecedentes de esta figura jurídica se identifican de la manera siguiente:

“1) Primer periodo (1824-1911), las C.I. que si bien no son reconocidas legalmente en la realidad operaban a manera de representación de estamentos (artesanos, mineros, zapateros, etc.), es decir los partidos políticos no estaban consolidados y por ende destacaba en lo individual el candidato en cuestión; 2) Segundo periodo (1911-1946) el cual implicó el reconocimiento institucional de las C.I. y un interesante nivel de regulación de aquellas; y 3) Tercer periodo (1946-2012), el rechazo parcial a las C.I. en donde desde 1946 se han eliminado hasta su previsión en la reforma de 2012”. (Hernández citado en Ramos 2016).

De lo anterior, se observa que en la primera fase las candidaturas independientes no estaban jurídicamente reconocidas; derivado de ello, los ciudadanos eran postulados a un cargo público de acuerdo con la profesión u oficio que desempeñaban, toda vez que los partidos políticos aún no se encontraban institucionalizados.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 1911 se publicó la Ley Electoral, la cual sustituyó la legislación comicial de 1901; con esta normativa se inició la segunda etapa, misma que reconoció legalmente a las candidaturas independientes, a las que se les otorgaron ciertas prerrogativas.

Esta figura jurídica tuvo vigencia aproximadamente 35 años hasta la aparición de la Ley Electoral de 1946, la cual eliminó las candidaturas independientes, ya que en su artículo 60 dispuso que solamente los partidos políticos podían registrar candidatos a cargos públicos. A partir de entonces,

las candidaturas independientes no tuvieron cabida en la legislación, y la única forma mediante la cual los ciudadanos podían postularse a cargos de elección popular era a través de los partidos políticos, medida que ulteriormente constituyó un monopolio el acceso al poder público.

En el año 2004, se suscitó el caso emblemático del ciudadano Jorge Castañeda Gutman, quien solicitó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) su inscripción como candidato independiente a la Presidencia de la República para la elección de 2006. En aquel momento, se había adelantado a los plazos establecidos en la legislación y además lo realizó bajo una modalidad que no se encontraba reconocida en la normatividad electoral, circunstancias por las que el entonces IFE le negó el registro al considerar que efectivamente su solicitud se hallaba fuera del plazo legal, así mismo, porque no lo efectuaba a través de un instituto partidario.

Ante la negativa del registro, el actor promovió demanda de amparo, la cual fue turnada para su conocimiento y tramitación al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (Ciudad de México). La autoridad jurisdiccional resolvió:

“...declarar improcedente el juicio de amparo interpuesto por la presunta víctima en virtud de “la improcedencia constitucional que se deriva del 105 Constitucional, fracción II, párrafo tercero, [que] establece [...] que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la acción de inconstitucionalidad; disposición que [...] guarda armonía con la improcedencia legal contenida en el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo”. (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2008, 25-26).

Luego de que conoció la sentencia, el ciudadano Castañeda Gutman decidió agotar todos los medios de defensa en el ámbito nacional, los cuales no le favorecieron. En razón de ello, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano aludiendo que en el país no existía un recurso efectivo para proteger su derecho político a ser votado. La Corte resolvió que el Estado mexicano no violó su derecho político a ser postulado a un cargo público, porque podía participar a través de los partidos políticos, así mismo, tampoco se quebrantó su derecho a la igualdad ante la ley, debido a que tuvo las mismas posibilidades de participar como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la Corte condenó a México a ajustar la legislación

secundaria, a fin de establecer un medio o recurso para garantizar a los ciudadanos la protección del derecho al voto pasivo.

Como se observa, el caso en comento fue un parteaguas para el sistema democrático mexicano, ya que permitió retomar el tema de las candidaturas independientes como una nueva forma para que los ciudadanos accedieran a los cargos de elección popular, así como tener mayor participación en la toma de decisiones relevantes para el país; por ello, el 09 de agosto de 2012, el Congreso de la Unión reformó la fracción II, del artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para quedar de la siguiente manera:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. ...

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

...

Bajo esta concepción constitucional, el artículo tercero Transitorio dispuso que los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Ciudad de México) debían realizar las adecuaciones necesarias a su legislación<sup>2</sup>, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto correspondiente, es decir, las legislaturas de las entidades tenían que homologar sus legislaciones de acuerdo con la reforma constitucional, a fin de que se abrieran las puertas a las candidaturas independientes a más tardar el 10 de agosto del 2013, pero las únicas entidades que establecieron tal figura fueron Zacatecas y Quintana Roo.

Ahora bien, durante los comicios que se celebraron en 2013, las candidaturas independientes representaron una nueva posibilidad para acceder al poder público así como un mecanismo para fomentar la competencia electoral, sin embargo, su regulación se dio de manera más amplia con la

---

<sup>2</sup> Decreto del 09 de agosto de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

reforma constitucional en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, en razón de que esta trajo consigo cambios sustanciales. Entre las novedades de la citada reforma sobresalen: la regulación de las candidaturas independientes, así como la participación ciudadana a través de la consulta popular.

Desde el año 2014 a la fecha se han celebrado dos comicios en el Estado de México y uno en el ámbito federal con la participación de candidaturas independientes, lo cual nos permite analizar su desenvolvimiento, además de vislumbrar los retos y desafíos a los cuales se han enfrentado al momento de competir contra los candidatos de los partidos políticos.

Respecto al Estado de México, en el Proceso Electoral 2014-2015 obtuvieron su registro como candidatos independientes al cargo de diputado local dos ciudadanos, sin embargo, ninguno de ellos obtuvo la curul. Para miembros de ayuntamientos participaron nueve candidatos, pero no ganaron la elección.

En procesos electorales del mismo periodo pero de otras entidades, los candidatos independientes participaron con reglas legales pero no del todo efectivas, aun así, los ciudadanos que triunfaron fueron los siguientes: en Sinaloa, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, como Diputado Federal; en Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien obtuvo el cargo de Gobernador; en Jalisco, José Pedro Kumamoto Aguilar, accedió a una curul como Diputado Local, en relación al cargo de Presidente Municipal ganaron; en Comonfort, Guanajuato, José Alberto Méndez Pérez; en García, Nuevo León, César Adrián Valdés Martínez y en Morelia, Michoacán, Alfonso Jesús Martínez Alcázar.

#### **IV. El marco jurídico de las candidaturas independientes en el ámbito federal**

Como hemos visto, las candidaturas independientes fortalecen al desarrollo y estabilidad de la democracia, toda vez que privilegian la participación política de los ciudadanos en los procesos electorales y garantizan su derecho a ser votados sin la necesidad de pertenecer a algún partido

político, por consiguiente, el legislador ha establecido normas generales para su regulación, las que se describirán en este apartado.

En primer término, la fracción II, del artículo 35 de la CPEUM, consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos para ser votados a todos los cargos de elección popular. En otras palabras, los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de solicitar el registro como candidatos ante la autoridad electoral que corresponda, sin necesidad de ser postulados por algún partido político, siempre y cuando se satisfagan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

En tanto, el incisos k) y p) de la fracción IV, párrafo segundo del artículo 116, de la CPEUM, dispone que las Constituciones y leyes de las entidades federativas deben fijar las bases y requisitos para que los ciudadanos soliciten su registro como candidato independiente, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas.

De igual forma, el inciso c), numeral 1, del artículo 3º de la LGIPE establece que las candidaturas independientes existen desde el momento que el ciudadano cumple con los requisitos que establece la ley y obtiene, por parte de la autoridad electoral, el registro correspondiente.

Como parte del marco normativo, es necesario conocer cuál es el procedimiento que debe seguir un ciudadano para poder ejercer su derecho político-electoral de ser votado, así como analizar si los requisitos que debe cumplir lo posicionan en un plano de igualdad de condiciones con relación a los candidatos postulados por los partidos políticos.

En el ámbito federal, los ciudadanos pueden contender por los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa; en el ámbito local pueden participar por los puestos de Gobernador, Diputado Local y miembros de los Ayuntamientos.

Por otra parte, el proceso de selección de los candidatos independientes a nivel federal de conformidad con el artículo 366 de la LGIPE, comprende las etapas siguientes:



1. Convocatoria;
2. Actos previos al registro de candidatos independientes;
3. Obtención del apoyo ciudadano; y
4. Registro.

En las elecciones federales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad electoral competente para emitir y difundir la convocatoria dirigida a todo aquel ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, en la cual se establecen los cargos a elegir, es decir, los puestos a los que pueden aspirar los solicitantes, los requisitos de elegibilidad, los plazos para recabar el apoyo ciudadano y los topes de gastos que pueden erogar (LGIPE, artículo 367, 2014).

En cuanto a los actos previos al registro de candidatos independientes (LGIPE, artículo 368, 2014), los ciudadanos deben manifestar su intención de postular su candidatura independiente a partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta que dé inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano.

Cabe mencionar que el aspirante tiene la obligación de acudir ante la autoridad competente dependiendo del cargo al que se postule; por ejemplo, para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se realiza ante el Secretario Ejecutivo del INE; en el caso de Senador por el principio de mayoría relativa, ante el Vocal Ejecutivo de la Junta Local de la entidad federativa que corresponda, y para Diputado Federal por el principio de mayoría relativa, en presencia del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital respectiva. En el ámbito local el aspirante al cargo de Gobernador lo deberá hacer ante el Secretario Ejecutivo del OPLE correspondiente; en caso de diputados por el principio de mayoría relativa ante el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital que corresponda, y para integrantes de los ayuntamientos con el Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal.

Una vez que el aspirante haya manifestado su intención de ser candidato independiente, debe acreditar la creación de una persona moral constituida en asociación civil, bajo un régimen fiscal

igual al de un partido político, demostrar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria, además de aperturar una cuenta bancaria a nombre de la asociación, a efecto de que pueda recibir el financiamiento privado y público correspondiente para el desarrollo de sus actividades.

Ahora bien, al día siguiente de que el ciudadano posea la calidad de aspirante a candidato independiente, se encuentra en posibilidad de realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. En esta etapa, surgen algunas interrogantes como: ¿Qué acciones se realizan para recabar el apoyo ciudadano? ¿Cuántos días tienen los aspirantes para la obtención del apoyo? y ¿Cuál es el porcentaje necesario para cumplir con aquél?

En este contexto, es importante precisar qué son los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, mismos que se pueden conceptualizar como “el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano”. (LGIPE, artículo 370, 2014).

Es así que el aspirante a candidato puede realizar todas las actividades que considere necesarias para la obtención del apoyo, pero estas serán cubiertas únicamente con financiamiento privado de origen lícito. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al diez por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate, mismo que deberá ser respetado por los aspirantes a candidatos independientes, ya que en caso de no hacerlo perderá el derecho a ser registrado o, en su caso, si ya cuenta con este, se cancelará el mismo. (LGIPE, artículo 374. 2, 2014).

Ahora bien, para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano<sup>3</sup> en los procesos en que se elijan a los dos Poderes de la Unión o en el que se renueven solamente la Cámara de Diputados, se sujetarán a los siguientes plazos, según corresponda:

---

<sup>3</sup> Esta fase de la obtención del apoyo ciudadano se rige por los artículos 369 y 371 de la LGIPE.

- En la candidatura al puesto de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas; para efectos de recabar el apoyo ciudadano, se contará con 120 días.
- En lo que respecta a Senadores, la cédula de respaldo tiene que contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la entidad federativa en cuestión, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. Sólo se tendrá un tiempo de 90 días para cumplir con la obtención del apoyo ciudadano.
- En la fórmula de Diputados Federales, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. En este caso, se contará con 60 días para recabar el mencionado apoyo. (LGIPE, artículo 369.2, 2014).

Cabe aclarar que en el ámbito local, cada entidad federativa de acuerdo a su libertad configurativa, establecerá en su legislación el porcentaje de apoyo ciudadano dependiendo el cargo de elección popular que considere adecuado.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como los Tribunales Electorales locales, han emitido sentencias en las que reconocen la constitucionalidad y legalidad de dicha obligación, “...ya que de esa forma se logra operatividad en el sistema electoral al evitar que un número indeterminado de ciudadanos solicite el registro, pues los candidatos independientes son

beneficiarios de financiamiento público y acceso a los medios de comunicación, por lo que un número elevado de participantes podría generar un inadecuado uso de esos recursos” (SG-JDC-11247/2015, 33).

Finalmente, una vez que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por la ley, los Consejos General, locales y distritales, tienen la obligación de celebrar una sesión para otorgar a los aspirantes el registro como candidatos independientes, con el fin de que estos puedan acceder a las prerrogativas y derechos que otorga la ley como: participar en la campaña electoral para el cargo que se postuló; tener acceso a los tiempos de radio y televisión en forma proporcional al tipo de elección de que se trate; el financiamiento público y privado; difundir propaganda electoral; replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación cuando consideren que se deforma su imagen por hechos falsos o sin sustento alguno; designar representantes ante los órganos del Instituto; así como solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral.

## **V. Aspectos relevantes de las candidaturas independientes en el Estado de México**

En el caso de la legislación local del Estado de México, las fases que se establecen para ser candidato independiente, se encuentran estipulados en el Libro Tercero del Código Electoral de la entidad. Cabe mencionar, que del proceso de selección de candidatos independientes es igual al que se establece en la LGIPE, ya que de igual forma señala las siguientes cuatro etapas: “la convocatoria; los actos previos al registro de candidatos independientes; la obtención del apoyo ciudadano y el registro respectivo”. (CEEM, artículo 93, 2016).

Hay que mencionar, que el 31 de mayo del 2016, se reformó el Código Electoral vigente en el Estado, para hacer armónicos los recientes criterios jurisdiccionales relativas a las candidaturas independientes, dado que en el artículo 28, fracciones IV y V, incluyó que los candidatos independientes pueden participar en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, siempre y cuando obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida en el municipio de que se trate.

Con relación a los plazos para solicitar el apoyo ciudadano, es importante indicar que estos se llevan a cabo conforme a la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, de la manera siguiente:

- Para el cargo de Gobernador, se contará con sesenta días para recabar el apoyo ciudadano y deberá reunir cuando menos el 3% de apoyo ciudadano de la lista nominal de electores y estar integrada por electores de por lo menos 64 municipios, que representen, cuando menos, el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
- Para postularse a Diputados de mayoría relativa estos tendrán cuarenta y cinco días para obtener el apoyo ciudadano, así como reunir el 3% de la lista nominal de electores, correspondiente al distrito electoral en cuestión, la cual se integra por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que representen, cuando menos, el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
- Para el cargo de integrantes de los ayuntamientos contarán con treinta días, asimismo, deberá reunir el 3% de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión y deberá estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que representen cuando menos el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

En este contexto, las candidaturas independientes se encuentran reguladas tanto en el ámbito federal como en el local, aunque al momento de la aplicación de algunos preceptos legales, dichas normas han sido motivo de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales competentes, estos casos se analizarán de manera particular en el siguiente apartado.

## **VI. Los factores de competitividad en las candidaturas independientes**

Las candidaturas independientes son una forma de participación directa de los ciudadanos para acceder a un cargo de elección popular, en las que intervienen elementos tales como el económico,

el acceso a radio y televisión, así como la sobrerregulación u omisión de la normativa electoral; características que permiten o limitan el éxito en la contienda. Justo en este apartado se analiza la influencia de estos factores en el Proceso Electoral 2016-2017, el cual fue organizado por el Instituto Local para elegir el cargo de Gobernador en el Estado de México.

Es importante destacar que en la entidad mexiquense no ha existido alternancia partidista por cuanto hace al Titular del Poder Ejecutivo, toda vez que dicha posición política se ha mantenido bajo el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), situación que impero en los comicios del pasado 4 de junio del año en curso.

Aunado a lo anterior, también se acentúa que dicha entidad tiene una población de aproximadamente 15, 175,862 (INEGI) de habitantes de los cuales 11, 361,453 están registrados en el Padrón Electoral y lo que respecta a la Lista Nominal de Electores esta es de 11, 323,1891. (IEEM).

Derivado de lo anterior, se puede señalar que el Estado de México es un escenario electoral de gran relevancia porque se observa que la filiación hacia los partidos políticos se encuentra muy arraigada, por lo cual la participación de los candidatos independientes se ha visto opacada.

**a) El factor económico (financiamiento público y privado) como eje rector de las candidaturas independientes**

El primer factor que se analizará es el financiamiento público, ya que este representa un componente importante para la campaña electoral del candidato independiente, además, los recursos que recibe son limitados en comparación con los entregados a los partidos políticos, ejemplo:

FINANCIAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL VOTO EN CAMPAÑAS ELECTORALES EN EL ESTADO MÉXICO				
Cargo	2015		2017	
	Partidos Políticos	Candidatos Independientes	Partidos Políticos	Candidatos Independientes
Gobernador	N/A	N/A	\$265,812,671.11	\$1,806,441.21
Diputado	\$145,707,023.55	\$971,380.16	N/A	N/A
Miembro de Ayuntamiento		\$971,380.16	N/A	N/A
Fuente: Elaboración propia tomando datos de los acuerdos IEEM/CG/15/2015 e IEEM/CG/37/2017. Disponible en: <a href="http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a.html">http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a.html</a>				

Del cuadro anterior, se colige que los candidatos independientes reciben financiamiento público extremadamente limitado y desigual en proporción al que reciben los partidos políticos, además no es suficiente para llevar a cabo sus actividades tendentes a obtener el voto de los ciudadanos, esto genera un desequilibrio en la contienda, toda vez que los candidatos postulados por los partidos políticos reciben más recursos económicos que los ciudadanos apartidistas, sobre todo porque en la etapa para recabar el apoyo ciudadano los aspirantes tienen que cubrir sus tareas propias con financiamiento privado.

Por ejemplo, durante el Proceso Electoral 2016-2017 que se celebró en el Estado de México, el financiamiento de los candidatos independientes se calculó como si en conjunto fueran un partido político de nueva creación y, para la elección de Gobernador les correspondió el equivalente al 33.3% del financiamiento para la obtención del voto de dicho partido, el cual se divide equitativamente entre todos aquellos que hubieran obtenido el registro; en este caso, sólo dos aspirantes lo alcanzaron: Isidro Pastor Medrano y María Teresa Castell de Oro Palacios, por lo que el Órgano Superior de Dirección del IEEM en aplicación a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, del Código Electoral local, determinó distribuir de manera igualitaria la cantidad de \$1,806,441.21, que resulto del cálculo legal correspondiendo y le otorgó \$903,220.60 (pesos) a cada candidato.

En ese sentido, la ciudadana Teresa Castell impugnó ante la Sala Superior del TEPJF, el Acuerdo IEEM/CG/83/2017 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), mediante el cual se distribuyó el financiamiento público de gastos de campaña para las candidaturas independientes registradas en la elección de la Gubernatura de esta entidad, al tenor de los agravios siguientes:

“...

- a) El referido artículo 146 es inconstitucional, ya que vulnera los principios de equidad en la contienda electoral y de igualdad de oportunidades entre los candidatos independientes y los partidos políticos.
- b) La previsión contenida en el numeral en cita, relativa a que el monto del financiamiento público se reparte en una proporción de 33.3% por cada tipo de elección, no encuentra justificación cuando solo se renueva el Ejecutivo Estatal, tal como acontece en el caso”. (SUP-JDC-234/2017, 6).

Al respecto, la autoridad jurisdiccional estableció que los agravios eran infundados, en virtud de que los partidos políticos y las candidaturas independientes tenían características diferentes, es decir, los primeros tienen actividades específicas como son:

“...la de promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de los órganos de representación política, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, conforme a los programas, principios e ideas que postulan; en tanto, el derecho a participar en una candidatura independiente, constituye una prerrogativa ciudadana exigible frente a la autoridad siempre que se cumplan con los requisitos, condiciones y términos exigidos por las leyes respectivas”. (SUP-JDC-234/2017, 9).

En particular, la autoridad jurisdiccional señaló que el Consejo General del IEEM únicamente se ciñó a asignar el financiamiento público que le correspondía a cada candidato independiente conforme a la norma electoral, por lo cual esta distribución “no atentaba contra el principio de equidad en la contienda, al replicar el modelo dispuesto en el texto constitucional en el que se dividen de manera equitativa las prerrogativas que correspondan a las y los candidatos independientes”. (SUP-JDC-234/2017, 10).

#### **b) El factor social (acceso a radio y televisión)**

Durante los procesos electorales, los medios de comunicación son una herramienta importante para los candidatos porque les permite presentar sus programas de acción y propuesta para posicionarse con la ciudadanía, es decir, los medios de comunicación actúan como mediadores entre los partidos políticos y ciudadanos para interactuar entre ellos.

En este sentido, se advierte que los medios de comunicación son un instrumento de información que influye en los ciudadanos sobre un candidato o partido político, puesto que le permite al electorado dar seguimiento a las acciones y actividades de estos, por lo cual este puede considerarse también un factor que contribuye a la consolidación y competitividad de las candidaturas independientes.



De acuerdo con la normatividad electoral, los aspirantes y candidatos independientes tienen prohibido contratar propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión, en caso de que se suscite esta violación, se sancionará con la negativa de registro como candidato independiente o la cancelación de dicho registro.

Ahora bien, los candidatos independientes accederán a tiempos en radio y televisión, como si se tratara de un partido político de nuevo registro, únicamente respecto del porcentaje que se distribuye en forma igualitaria a los partidos políticos de acuerdo con la Constitución Federal, en este contexto los candidatos independientes en el Estado de México, tuvieron un pautado de spots de 4,516 en radio, en tanto en televisión fue de 1,595; mientras que el partido político con mayor pautado en radio tuvo 57,287 y en televisión 21,958<sup>4</sup>.

De las cifras mencionadas, se observa que entre el pautado otorgado al partido político con mayor pautado y los candidatos independientes hubo una amplia diferencia: en los spots de radio de 52,771, en tanto en televisión fue de 20,363, de lo que se desprende que un candidato apartidista tiene mínimas posibilidades de posicionarse ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación (radio y televisión), en virtud de que se le asigna menos tiempo que a los partidos políticos.

En esta tesitura, es necesario que el legislador construya un modelo de comunicación política que permita una asignación más proporcional de tiempos en radio y televisión entre los partidos políticos y candidatos independientes, con la finalidad de que esta figura sea competitiva en los comicios electorales, en razón de que los medios de comunicación son un elemento a través del cual los actores políticos diseñan sus campañas electorales con la finalidad de que la mayoría de los ciudadanos los conozcan, ya que es imposible que los electores de todas las comunidades conozcan personalmente a los candidatos.

---

<sup>4</sup> Informe final de campañas del proceso electoral 2016-2017, monitoreo a medios de comunicación, impresos e internet. Disponible en: <http://www3.ieem.org.mx/2017/monitoreo/campa.html> (Consultada el 12 de julio de 2017).

**c) La sobrerregulación u omisión de la normativa electoral de los candidatos independientes, casos concretos: María Teresa Castell de Oro e Isidro Pastor Medrano**

Continuando con este estudio, ahora se aborda lo referente a la materialización de las disposiciones normativas en las candidaturas independientes que se registraron durante el Proceso Electoral 2016-2017, que se desarrolló en el Estado de México.

En el primer caso, la ciudadana María Teresa Castell de Oro promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local<sup>5</sup>, debido a que desde su perspectiva se establecieron requisitos desproporcionales que afectaban sus derechos políticos-electorales, por la razón siguiente:

- Tenía que recabar las firmas (apoyo ciudadano) del equivalente al 3% de la lista nominal de electores del Estado de México, con corte al 31 de agosto de 2016, la cual debía estar integrada por electores de por lo menos sesenta y cuatro municipios que representaran, cuando menos el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de dichos municipios.

Es decir, tenía que entregar por lo menos 328,740<sup>6</sup> firmas de ciudadanos mexiquenses, así como anexar copia simple de todas las credenciales para votar vigentes de cada uno de estos, para que se adjuntaran con la cédula de respaldo y así entregarlo en un disco compacto no regrabable conforme al formato que para tal efecto proporcionara el IEEM.

---

<sup>5</sup>Expediente: JDCL/11/2017, mediante el cual impugnó el acuerdo IEEM/CG/70/2016 relativo a la expedición del Reglamento para el Registro de candidaturas independientes, y el acuerdo por el que se publicó la "Convocatoria para postularse como Candidato Independiente al cargo de Gobernador, para el periodo Constitucional de 2017-2023 en el Estado de México".

<sup>6</sup>En términos del artículo 99 del Código, la cantidad de ciudadanos equivalente al tres por ciento de 10,957,992; correspondiente a la Lista Nominal de Electores con corte al treinta y uno de agosto de 2016, proporcionado por la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México, mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/1127/2016, en fecha veintiocho de octubre de 2016, es de 328,739.76, sin embargo, al no poderse fraccionar un ciudadano, de tomarse 328,739 no se alcanzaría al menos el 3% por lo que se debe considerar el número entero inmediato siguiente, ascendiendo a 328,740 ciudadanos.

Ante esto, la promovente adujo que estos resultaban ser inconstitucionales, excesivos, desproporcionados e injustificados, violando así los principios de idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, que tutelan la participación de los candidatos independientes.

Partiendo de los argumentos vertidos por la aspirante, el TEEM resolvió que eran infundados respecto de recabar las firmas del equivalente al 3% de la lista nominal de electores del Estado de México, ya que era un requisito constitucional, pues la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 56/2014 y su acumulada 60/2014, reconoció como constitucionales tanto el plazo como el porcentaje requerido para la obtención del apoyo ciudadano.

Por otro lado, el Tribunal local consideró que recabar el apoyo ciudadano en por lo menos sesenta y cuatro municipios que representaran cuando menos el 1.5% de ciudadanos era un requisito que restringía de manera innecesaria el derecho político electoral de participación política de quienes aspiren a obtener una candidatura sin partido para el cargo de Gobernador.

Además, añadió que esta exigencia implica una barrera injustificada, dado que lo importante es que el candidato independiente demuestre un posicionamiento ante la población y con el 3% se debería de dar por satisfecho. En esta tesitura, se inaplicó la porción normativa del artículo 99 del Código Electoral del Estado de México (CEEM) solo en el apartado correspondiente a la acreditación del 1.5% en por lo menos sesenta y cuatro municipios.

De esta manera, el TEEM<sup>7</sup> determinó inaplicar diversas disposiciones normativas contenidas en el artículo 120, fracción II, inciso f) del CEEM; los numerales 19, fracción II y 25, fracción VIII del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes y la base SEXTA, fracción II, así como el párrafo quinto; la base OCTAVA inciso B, fracción VIII de la convocatoria en mención, en los cuales se exigía que los candidatos independientes debían anexar a las cédulas de respaldo la copia legible de la credencial para votar vigente de aquellos ciudadanos que manifestaron su

---

<sup>7</sup> Expediente JDCL/11/2017, promovido por María Teresa Castell de Oro Palacios.

apoyo a la candidatura. Además se excluyó el requisito de presentar un disco regrabable con la base de datos, así como el de llenar las cédulas de respaldo en lo que respecta al domicilio, lo anterior, porque representaba una carga excesiva y desproporcional para el aspirante a candidato independiente debido a que se violentaban sus derechos humanos reconocidos en la CPEUM y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

A pesar de lo resuelto por el TEEM, esta sentencia fue impugnada ante la Sala Superior, mediante juicio de revisión constitucional<sup>8</sup>. En este sentido, el Pleno consideró que la porción normativa del artículo 99 del CEEM, la cual dispone que el 3% de respaldo ciudadano, se debe acreditar que se recibió en por lo menos sesenta y cuatro municipios que representen cuando menos el 1.5% de los ciudadanos que figuren en las correspondientes listas nominales de electores, ya había sido objeto de análisis de constitucionalidad por parte de la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 56/2014 y acumulada. En esa tesitura, se adujo que el tribunal local se encontraba impedido para pronunciarse en modo distinto a lo ya resuelto en las ejecutorias dictadas por el máximo tribunal del país, toda vez que resultan obligatorias para los tribunales locales y también para las Salas del TEPJF.

De lo anterior, se considera que solicitar al ciudadano demostrar un número determinado de apoyo ciudadano, coadyuva a conocer la fuerza política con la que cuenta para posicionarse ante la ciudadanía, postura que asumió la Sala Superior en la Jurisprudencia 16/2016, de rubro: “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO, SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD”.

Con base en este criterio jurisdiccional, se coincide en que a las candidaturas independientes se les debe exigir un porcentaje de apoyo ciudadano, por ser un filtro necesario para confirmar que son una opción sólida para competir contra los candidatos postulados por los partidos políticos, sin

---

<sup>8</sup> Expediente SUP-JRC-16/2017, promovido por el Partido de la Revolución Democrática.

embargo, se considera que las legislaturas a nivel local deben determinar el porcentaje idóneo que debe cubrir cada aspirante.

Atento a ello, es necesario que se analicen distintos factores, a fin de establecer un porcentaje racional de apoyo ciudadano, bajo los siguientes criterios:

- El tipo de cargo al que se aspira.
- La dimensión territorial.
- El número de ciudadanos que integran el padrón electoral.
- El nivel socioeconómico de la población.
- El nivel de participación ciudadana.
- El número de municipios que conforman al Estado.
- Ampliación del plazo para recabar el apoyo ciudadano.

Así, es necesario diferenciar los cargos a los que se aspira y no homologar el porcentaje, por ejemplo: en el caso del Estado de México la legislatura establece que para el cargo de Gobernador, Diputados y miembros del Ayuntamiento el porcentaje será del 3% de la lista nominal de electores a nivel estado, distrito y municipio respectivamente. Esta condición, afecta el desarrollo de las postulaciones de los aspirantes a candidatos independientes, ya que la distribución de los ciudadanos inscritos en las correspondientes listas nominales no son uniformes en cuanto al número de electores.

De acuerdo a lo anterior, los aspirantes a candidatos independientes para el cargo de Gobernador en el Estado de México, tenían la obligación de obtener el apoyo de por lo menos 328,740 ciudadanos en un plazo de sesenta días, y para lograr este objetivo, debían obtener 5,479 firmas por día, lo que por hora equivalía a 228 firmas. Circunstancias que resultaron excesivas.

Por otra parte, la dimensión poblacional y territorial del Estado de México es muy diversa tal es el caso de los municipios de Tlatlaya<sup>9</sup> y Luvianos<sup>10</sup> son los más extensos en cuanto a territorio, pero no son los más poblados, en este caso tendríamos que referirnos a los municipios de Ecatepec<sup>11</sup> y Nezahualcóyotl<sup>12</sup>. Por ello, es necesario realizar un estudio respecto de las características de cada cargo y considerar los factores poblacionales y territoriales, para lograr una mayor equidad en las contiendas entre los candidatos independientes y los postulados por los partidos políticos.

Lo que se pretende al estudiar estos factores es demostrar que se debe impulsar una reforma electoral que privilegie y garantice los derechos políticos-electorales de los ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular por la vía independiente.

En lo que concierne al ciudadano Isidro Pastor Medrano, su contribución fue en otras temáticas, ya que, en primer lugar, instó un medio de impugnación contra la decisión del IEEM por no reconocer el derecho a voz de su representante durante las sesiones que celebrara el Consejo General, de lo cual el órgano jurisdiccional local revocó la medida del Organismo Público Local, a fin de que se convocara al representante y este pudiera intervenir en los asuntos que fueran de interés del ciudadano aspirante. De esta manera se maximizó su derecho a ser votado al contar con un representante que vigilara y cuidara los intereses del aspirante a candidato independiente.

Así mismo, con base en la sentencia de la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-69/2017, el ciudadano Isidro Pastor solicitó que los efectos de las inaplicaciones normativas que se llevaron a cabo en las sentencias emitidas por el TEEM, en los juicios ciudadanos locales identificados con

---

<sup>9</sup> Su población es de 34,937 habitantes y cuenta con una extensión territorial de 791,49 km<sup>2</sup> Disponible en:[http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div\\_municipal.aspx?tema=me&e=15](http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=15). (Consultada el 5 de julio de 2017).

<sup>10</sup> Su población es de 27,860 habitantes y cuenta con una extensión territorial de 703,00km<sup>2</sup> Disponible en:[http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div\\_municipal.aspx?tema=me&e=15](http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=15). (Consultada el 5 de julio de 2017).

<sup>11</sup> Su población es de 1, 677,678 habitantes y cuenta con una extensión territorial de 160,17km<sup>2</sup> Disponible en:[http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div\\_municipal.aspx?tema=me&e=15](http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=15). (Consultada el 5 de julio de 2017).

<sup>12</sup> Su población es de 1, 039,867 habitantes y cuenta con una extensión territorial de 63,74km<sup>2</sup> Disponible en:[http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div\\_municipal.aspx?tema=me&e=15](http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=15). (Consultada el 5 de julio de 2017).

las claves JDCL-11/2017 y JDCL-12/2017, también se extendieran a su favor. En efecto, el Pleno de la Sala Superior estimó que el argumento era fundado, debido a que los contendientes tenían coincidencia con determinadas calidades jurídicas y fácticas en un mismo proceso electoral, y ante el riesgo de vulnerar su derecho a la igualdad, los efectos se hicieron extensivos a las demás personas que buscaban una candidatura independiente.

Dicho de otra forma, el alcance de la sentencia fue únicamente para los aspirantes a candidatos independientes en el proceso comicial 2016-2017, lo cual no se tradujo en una declaratoria de inaplicación con efectos *erga omnes* sino en una resolución *sui generis* con efectos particulares. Ello no implicó una conculcación al principio de relatividad de las sentencias porque aun cuando sus efectos no se limitaron a las partes que acudieron a juicio, se extendieron solamente a un grupo de ciudadanos inmersos en la competencia electoral. Por ende, la Sala Superior vinculó al IEEM para que los requisitos que fueron declarados inaplicables por parte del TEEM, los ampliara a todos los aspirantes a candidatos independientes a la Gubernatura de la entidad.

Con dicho fallo jurisdiccional, se estableció un buen precedente en favor de las candidaturas independientes, pues a partir de ahora las elecciones se verán desde otra óptica. Esto se traduce en un claro respeto a la competencia en igualdad de condiciones para todos los participantes, en razón de que no se pueden aplicar criterios diferentes a iguales sujetos de derecho, principalmente porque la equidad de la contienda es una máxima de la democracia.

Por otra parte, el TEEM a través del Recurso de Apelación RA/13/2017, resolvió dejar sin efectos el registro como candidato independiente del ciudadano Isidro Pastor Medrano, asimismo vínculo al IEEM para que con el apoyo de las áreas operativas de la institución, se repusiera el procedimiento de validación de las cédulas de respaldo ciudadano.

Derivado de esta situación, el Órgano Público Local tuvo que realizar el procedimiento respectivo para verificar las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano de este candidato independiente, ello implicó una ardua tarea para la autoridad jurisdiccional, toda vez que tuvo que disponer de recursos económicos y humanos para llevar a cabo esta actividad en un plazo de 12 días.

Es importante destacar, que los Organismos Públicos Locales (OPL) a partir de la introducción de la figura de candidaturas independientes al sistema democrático, se han enfrentado a múltiples desafíos como sucedió en el Estado de México, el cual a partir de la revocación del registro del referido candidato independiente tuvo que verificar de nueva cuenta tanto las cédulas de respaldo del apoyo ciudadano, así como las 328,740 firmas, esta tarea no fue fácil.

Sin embargo, esto representó un área de oportunidad porque permitió vislumbrar cuestiones que pueden mejorarse como es el caso de la implementación de un sistema informático a través del cual se verifique el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes, con la finalidad de garantizar sus derechos políticos.

Ante eventualidades de esta naturaleza, se sostiene que las autoridades legislativas, administrativas y judiciales en su ámbito de competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como lo decreta la CPEUM.

## **VI. Conclusiones**

Primero. En México, los ciudadanos podían acceder a un cargo público a través de la postulación de un partido político, toda vez que esta era la única forma de participar activamente, sin embargo, a partir de las reformas constitucionales político-electorales que se suscitaron en 2012 y 2014, se retomaron las candidaturas independientes como una opción alterna a los institutos partidarios.

Segundo. De la experiencia del Estado de México, respecto de las candidaturas independientes se advierte que el marco regulatorio de estas durante el proceso de selección de los candidatos independientes, prevé requisitos legales de gran complejidad que resultan excesivos, por lo cual se debe modificar la legislación, a efecto de hacer más fácil el acceso a los ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular, ya que como se ha mencionado anteriormente, las candidaturas ciudadanas contribuyen al desarrollo de la democracia.



Tercero. Con la inclusión de las candidaturas independientes al marco normativo electoral, se pretende fortalecer el régimen democrático, dado que hoy en día la desconfianza, la apatía y la desafección partidaria impactan en los índices de participación ciudadana. Es por ello, que se debe seguir trabajando en perfeccionar la legislación vigente para que se consolide la figura en estudio, y de esa manera los ciudadanos hagan valer el ejercicio de sus derechos políticos-electorales en beneficio de la sociedad.

### **Bibliografía**

- CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2017. Disponible en: [www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_240217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf). (Consultada el 2 de julio de 2017).
- CEEM. Código Electoral del Estado de México. 2017. Instituto Electoral del Estado de México.
- Ferreira, Raúl Gustavo, Sobre las candidaturas electorales independientes de los partidos políticos, exposición presentada en las Jornadas sobre reforma política y constitucional, Comisión de Asuntos Constitucionales, Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, 5 de agosto de 2002. Disponible en: [www.buenosaires2010.org.ar/insumos-tecnicos/biblioteca/institucional/candidaturas-ponencia.pdf](http://www.buenosaires2010.org.ar/insumos-tecnicos/biblioteca/institucional/candidaturas-ponencia.pdf). (Consultada el 5 de julio de 2017).
- IEEM. Instituto Electoral del Estado de México. Estadístico de padrón electoral y lista nominal con corte al 31 de marzo de 2017. Disponible en: [http://www3.ieem.org.mx/numeralia/lista\\_nominal.html](http://www3.ieem.org.mx/numeralia/lista_nominal.html). (Consultada el 12 de julio de 2017).
- \_\_\_\_\_. Instituto Electoral del Estado de México. Informe final de campañas del proceso electoral 2016-2017, monitoreo a medios de comunicación, impresos e internet. Disponible en: <http://www3.ieem.org.mx/2017/monitoreo/campa.html>(Consultada el 12 de julio de 2017).
- INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: <http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15>. (Consultada el 6 de julio de 2017).

LEGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2014. México. Instituto Electoral del Estado de México.

Ramos Sobarzo, Arturo. 2016. La constitucionalidad de las candidaturas independientes. México: Tirant lo Blanch.

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de sentencia de 6 de agosto de 2008. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM01.pdf>. (Consultada el 03 de julio de 2017).

\_\_\_\_ SG-JDC-11247/2015. Actores: Jorge Ramírez Martínez y Baldemar Sicaños. Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sentencias/SG-JDC-11247-2015.pdf> (Consultada el 05 de julio de 2017).

\_\_\_\_ SUP-JDC-234/2017. Actora: María Teresa Castell de Oro Palacios. Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Disponible en: [www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion.../SUP-JDC-0234-2017.pdf](http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion.../SUP-JDC-0234-2017.pdf). (Consultada el 7 de julio de 2017).